

Chile. La memoria del dolor

Mario Amorós , (Historiador y Periodista español). **ICAL** -- 2003-12-29

Entre 1973 y 1990 la junta militar chilena violó los derechos humanos de centenares de miles de personas. Estos son algunos de los episodios más crueles de la política de exterminio implementada por la dictadura de Augusto Pinochet.

“De cuando en cuando la democracia debe bañarse en sangre para que pueda seguir siendo democracia”, advirtió Augusto Pinochet el 24 de septiembre de 1973. La junta militar había iniciado trece días antes su implacable amputación “del cáncer marxista” que creían que padecía Chile. Entre sus miles de víctimas hubo comunistas, socialistas, izquierdistas, cristianos progresistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, militares democráticos..., todos ellos considerados “humanoides”, no humanos, por los golpistas, en palabras del almirante José Toribio Merino. Además, centenares de miles de personas fueron obligadas a partir al exilio, más de cien mil estuvieron detenidas en campos de concentración y según la psicóloga Paz Rojas entre 600.000 y 800.000 sufrieron torturas.

El 11 de septiembre de 1973 Víctor Jara, conocido cantautor y director de teatro, acudió a su lugar de trabajo en la Universidad Técnica del Estado, respondiendo al llamamiento que la Central Unica de Trabajadores formuló en las primeras horas del golpe de estado. Allí fue detenido por los militares, que le condujeron al Estadio Chile, donde entre los miles de presos se encontró con algunos de sus compañeros comunistas, entre ellos Marcos Suzarte, quien aún conserva fresca su última conversación con Víctor la tarde del 13 de septiembre: “Estos van a asesinarme. El fascismo se ha instaurado en nuestro país, es una dictadura criminal. Tengan cuidado”, les dijo. [1]

En la madrugada del 16 de septiembre su cuerpo fue hallado cerca del cementerio metropolitano junto a otros cinco cadáveres. Según el Informe Rettig, “Víctor Jara murió a consecuencia de heridas múltiples de bala, las que suman 44 orificios de entrada de proyectil con 32 de salida” [2]. Dos días después su esposa Joan acudió a la morgue a identificar su cuerpo. “Era Víctor, aunque le vi delgado y demacrado. ¿Qué te han hecho para consumirte así? (...) Tenía la ropa hecha jirones, el pecho acribillado y una herida abierta en el abdomen, las manos parecían colgarle de los brazos en extraño ángulo, como si tuviera rotas las muñecas... pero era Víctor, mi marido, mi amor”. [3]

Dos semanas después del asesinato de una de las voces de la revolución chilena, el general Sergio Arellano Stark empezó a recorrer, en calidad de oficial delegado de Pinochet, varios campos de concentración en el centro y el norte del país. La caravana de la muerte concluyó a finales de octubre tras asesinar a 72 personas, entre ellas a Carlos Berger, periodista y militante comunista.

Su viuda, Carmen Hertz, explica que el 18 de octubre de 1973 el fiscal militar de Calama accedió a su petición de conmutar por una multa los días que le quedaban de cárcel a su marido, condenado por un consejo de guerra porque la radio que

dirigía incumplió el 11 de septiembre la orden de cesar las emisiones. Sin embargo, al día siguiente el fiscal militar rechazó su escrito con la única explicación de que había llegado un grupo de oficiales al mando del general Arellano en un helicóptero Puma.

“Como no entendía (...) en qué consistía esta situación nueva y qué consecuencia podía tener, me fui a la cárcel para comunicarle esto a Carlos. Lo encontré extraordinariamente nervioso y preocupado porque habían sacado del penal a la mitad de los detenidos, encapuchados y maniatados, llevándoselos a un lugar desconocido (...) Lo acompañé hasta aproximadamente las cinco de la tarde. Estaba quemado por el sol, con sus bluejeans, su camisa, su pipa. Nos despedimos con un beso. Su último beso...”

Al día siguiente Carmen Hertz supo que su marido había sido asesinado. “En Santiago conseguí el certificado de defunción: destrucción tórax y región cardíaca – fusilamiento. Hora: 18 horas. Una hora después que me despedí de él en la cárcel. Una hora después...” [4] El cuerpo de Carlos Berger aún no ha aparecido.

La tragedia de Otilia Vargas. En 1974 la represión se centró en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Aquel año este partido perdió a 200 militantes, entre ellos a su secretario general, Miguel Enríquez, acribillado por la DINA el 5 de octubre en San Miguel. Seguramente es Otilia Vargas quien simboliza con mayor dramatismo la tragedia del MIR. Otilia tiene 75 años y fue maestra; de sus seis vástagos sólo vive Patricia. “El 10 de septiembre de 1974 mi hijo Carlos Fredy fue detenido por agentes de la DINA en la oficina de publicidad donde trabajaba, en el centro de Santiago. Fue encerrado y torturado con crueldad en José Domingo Cañas y Cuatro Alamos y desde entonces está desaparecido. Tenía 25 años”.

“Apenas trece días después, el 23 de septiembre de 1974, mi hijo Aldo Gonzalo fue secuestrado por la DINA en la calle, muy cerca de mi casa”. Este estudiante de 23 años también fue recluido en algunas cárceles secretas y está desaparecido. Un año después, el 15 de octubre de 1975, fue asesinado Dagoberto, sociólogo de 28 años y miembro de la Comisión Política del MIR. “Vivía en una casa clandestina con otros dirigentes del MIR (partido en el que militaban todos sus hijos). Cayó muerto en un gran enfrentamiento con los militares en la parcela Santa Eugenia de Malloco. No nos entregaron su cuerpo”.

Y a los cuatro meses, el 24 de febrero de 1976, fueron detenidos los mellizos Iván Renato y Mireya, estudiantes de 21 años. “Allanaron la casa de La Florida que compartían con otro compañero del MIR y otra compañera y su hija. La prensa aseguró que ambos habían muerto, pero la mujer que vivía con ellos dijo que Mireya sólo había sido herida en una pierna. La llevaron a Villa Grimaldi, donde murió”.

“Sus cuerpos sí los entregaron, aunque me costó mucho porque nos buscaban y tuvimos que abandonar nuestra casa. No partimos al exilio en Cuba hasta que logramos que mis hijos fueran sepultados”. En 1994 los cuerpos de Iván Renato y Mireya Pérez Vargas fueron trasladados al impresionante Memorial levantado en el cementerio general de Santiago en recuerdo de las víctimas de la dictadura.

Seria, con una mirada perdida que revela su casi absoluta ceguera y con un hilo de voz, Otilia concluye su estremecedor relato: “No se puede superar la desaparición de cinco hijos. No se supera nunca, con nada, aunque Pinochet sea juzgado y estén

presos algunos militares. No sé de dónde me ha salido la fuerza para seguir viviendo”. [5]

El prestigioso sociólogo Tomás Moulian describe con lucidez el drama al que el dictador condenó a miles de personas como Otilia: “La desaparición sume al entorno de la víctima en la incertidumbre. En ese sentido, el suplicio del muerto se prolonga en el suplicio de sus familiares. Con ello el dispositivo del terror consigue su perpetuación, produce una nueva y más extensa cohorte de víctimas. El terror necesita que su presencia sea recordada. La represión es puntual, el terror debe ser permanente. Por ello el terror encuentra en las desapariciones una forma de presencia que se prolonga a través del tiempo”. [6]

Pero aquella dictadura no sólo violó manera sistemática el derecho a la vida, también conculcó los derechos humanos sociales y económicos del pueblo chileno. A partir de 1975 la junta militar empezó a imponer, por primera vez en el mundo, el modelo neoliberal y para ello contó con los consejos directos de algunos de sus principales ideólogos, como Milton Friedman y Arnold Harberger. Aquella política se caracterizó por el aumento de los precios, el descenso de los salarios, la disminución del gasto público, la devaluación de la moneda, las privatizaciones, la contrarreforma agraria, el fin del reparto de leche y de alimentos a los niños...

Los habitantes de las humildes poblaciones fueron los más afectados. En los dos primeros años de la dictadura militar el PIB disminuyó un 12,9% y en los tres primeros años el desempleo ascendió al 16,8% [7]. Si bien en 1972 y 1973 el boicot económico de la oposición y de Washington había provocado un grave desabastecimiento de productos en las grandes ciudades y la aparición del mercado negro, “todos teníamos para comprar”, explica Lina Brisso, pobladora de La Victoria (Santiago de Chile). “Después llegó la dictadura, había de todo en los supermercados y nadie de nosotros podíamos comprar”. [8]

En 1977 Labbé y Montes llegaron a la siguiente conclusión: “En la hipótesis más probable el ingreso real de más de la mitad de la población fue reducido en dos tercios”. Además, el salario mínimo fue fijado en 431 pesos mensuales, cantidad con la que apenas se podía comprar un tarro de un kilo de café, otro de leche en polvo y un kilo de mantequilla. Pese a ello, Friedman no tuvo reparos en afirmar en 1979 que “la reconstrucción (sic) de la economía chilena será considerada como uno de los milagros económicos del siglo veinte”. [9]

La Operación Colombo. En 1975 arreciaban las críticas contra la junta ante las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos realizadas por los exiliados y los partidos de izquierda, que fueron recogidas, además, en informes de organizaciones como Amnistía Internacional. Para neutralizar estas críticas, que Pinochet atribuía -y continúa atribuyendo- a la “propaganda comunista”, la DINA organizó una siniestra campaña de desinformación, la Operación Colombo, cuyo objetivo era convencer a la opinión pública nacional e internacional de la inexistencia de desaparecidos en Chile.

Así, el 15 de julio se publicó en Buenos Aires el único número del semanario Lea, que en un reportaje titulado “La Vendetta Chilena” citaba a sesenta militantes del MIR que habrían sido asesinados por sus propios compañeros en América Latina y Europa. Su distribución estuvo a cargo del Ministerio de Bienestar Social argentino, cuyo titular era José López Rega, uno de los fundadores de la ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, imputada en más de mil asesinatos y desapariciones entre 1974 y 1977. A partir del 19 de julio la prensa chilena se hizo

eco de esta falsedad a través de un teletipo de UPI cuyo encabezamiento rezaba: “Extremistas chilenos se matan entre ellos”.

Además, el 24 de julio La Segunda reprodujo, bajo el indecente titular “Exterminan como ratas a miristas”, una información falsa ofrecida siete días antes por el periódico O’Dia de Curitiba (Brasil) en la que nombraba a los 59 militantes del MIR que habrían “muerto”, habrían sido “heridos” o se habrían “evadido” tras dos supuestos enfrentamientos entre la policía de Salta (Argentina) y grupos guerrilleros.

A partir de estas y otras falsedades, el régimen emprendió una despiadada campaña para intentar humillar a los familiares de los detenidos desaparecidos y a los organismos que les prestaban apoyo, como el intereclesial Comité de Cooperación para la Paz. Sin embargo, el Informe Rettig confirmó que esas 119 personas (cien hombres y diecinueve mujeres, en su gran mayoría menores de treinta años y militantes del MIR) fueron detenidas entre el 23 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975, torturadas, encarceladas, asesinadas y hechas desaparecer por agentes de la DINA.

No obstante, el impacto psicológico de la Operación Colombo –el precedente inmediato del Plan Cóndor- sobre los familiares de los 119 desaparecidos fue “agudo y brutal” ya que por primera vez tuvieron la certeza de que sus seres queridos habían sido asesinados. Por ejemplo, una madre reaccionó así: “Me encerré en el baño, ahí en el Comité, lloraba y lloraba. Luego me levanté y, sin poder contenerme, gritaba mientras me golpeaba la cabeza contra las paredes de un lado a otro. No podía ser...” [10]

En 1975 los familiares de Gabriela Uribe, de Martín Elgueta, de Mario Fernando y Patricia Peña..., de los 119, acudían a diario a la sede del Comité de Cooperación para la Paz para realizar todos los trámites posibles a fin de conocer su paradero. No obstante, “la burla de la dictadura, su terrible crueldad”, en palabras de otra madre, les planteó la necesidad de intensificar su lucha y así nació la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). “Nos dimos cuenta que estábamos ante una maquinaria de exterminio tan poderosa que atravesaba nuestras fronteras y por ello decidimos organizarnos”, señaló Sola Sierra, su primera presidenta. [11]

La AFDD organizó huelgas de hambre, ayunos prolongados, encierros, manifestaciones, actividades culturales... para exigir información sobre la suerte de sus seres queridos. Poco a poco fueron convenciéndose de que habían sido asesinados y desde entonces exigen conocer la verdad sobre su muerte y un juicio justo y una condena para los responsables de su desaparición. Aquella lucha la compartieron con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y con organismos tan importantes como la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y numerosos abogados y contó y cuenta con el apoyo de la mayor parte de la sociedad.

Calle Conferencia. En 1976 el principal objetivo de la represión fue el Partido Comunista. A finales de abril la DINA supo, tras torturar a varias personas, que sus principales dirigentes tenían previsto reunirse en una casa del número 1.587 de la calle Conferencia de Santiago. En los primeros días de mayo fueron detenidos allí Mario Zamorano, Jorge Muñoz y Elisa Escobar, entre otros, y poco después Lenin Díaz y Víctor Díaz en otros lugares de la capital. “Una cosa sí que notificamos al

comunismo: seguimos sus pasos uno a uno y al primer intento de rebrote en nuestro país, lo aplastaremos sin contemplaciones”, había proclamado Pinochet en marzo de 1974. [12]

La detención de su marido, Jorge Muñoz, y de sus compañeros sorprendió a Gladys Marín, actual secretaria general del Partido Comunista, en San José, cuando se disponía a intervenir ante el Parlamento costarricense. “Pase lo que pase con vuestro padre, los queremos mucho y deben sentirse orgullosos de él”, decía el telegrama que envió a sus dos hijos, a quienes tuvo que dejar en Chile al partir al exilio en 1974. [13]

En 1977 regresó a Chile por Argentina, sorteando la represión del Plan Cóndor, y allí participó en la elaboración de la línea política comunista de la Rebelión Popular de Masas, que en los años ochenta fue el eje de las masivas protestas populares contra la dictadura. Gladys Marín vivió en la clandestinidad hasta 1989 y no pudo volver a ver a sus hijos hasta 1987 en Bariloche (Argentina). Por la desaparición de su marido y de todos los militantes comunistas en particular y por todas las víctimas en general Gladys presentó el 12 de enero de 1998 la primera querrela criminal contra Pinochet en Chile.

El 21 de septiembre de 1976, cuatro meses después de la desaparición de toda la dirección del Partido Comunista, la DINA asesinó a Orlando Letelier, ministro de Relaciones Exteriores y Defensa con Salvador Allende, y a su secretaria, la ciudadana norteamericana Ronni Moffit, en el corazón del barrio diplomático de Washington. Ya en septiembre de 1974 la DINA había matado al general constitucionalista Carlos Prats y a su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires y en octubre de 1975 había ametrallado a Bernardo Leighton, destacado dirigente de la Democracia Cristiana y ex vicepresidente de la República, y a su esposa Anita Fresno en Roma.

“Orlando es un símbolo de las violaciones de los derechos humanos en Chile. Fue detenido el mismo 11 de septiembre (de 1973) y lo mandaron a la isla de Dawson (en el extremo sur del país) con otros dirigentes del Gobierno de Allende. Estuvo allí un año. Once países pidieron su liberación. La presión sobre Pinochet fue muy grande. Finalmente, el alcalde de Caracas lo llevó a Venezuela en septiembre de 1974. Salió sin documentos, como si fuera un paquete”, recuerda su hermana Fabiola, presidenta de CODEPU y una de las más prestigiosas abogadas de derechos humanos de Chile. [14]

Plan Cóndor. El asesinato de Letelier y Moffit es una de las operaciones emblemáticas del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, un operativo terrorista que empezó a funcionar a partir de una reunión celebrada en Santiago en noviembre de 1975 a instancias de Manuel Contreras, jefe de la DINA.

De hecho, según los documentos desclasificados por Estados Unidos, en julio de 1976 Pinochet pidió al dictador paraguayo Alfredo Stroessner que entregara pasaportes de su país a dos oficiales chilenos con nombres falsos que resultaron ser Michael Townley –un mercenario norteamericano- y Armando Fernández Larios, miembros del comando de la DINA que asesinó a Letelier y a Moffit [15]. Además, el secretario privado de Stroessner les gestionó la obtención de dos visados norteamericanos para que pudieran cumplir una misión que según Contreras –condenado a siete años de cárcel por este crimen- fue ordenada por Pinochet [16]. Entre los centenares de víctimas del Plan Cóndor se encuentran también los ex

presidentes de Brasil, Joao Goulart, y Bolivia, el general Juan José Torres, o el ex presidente del parlamento uruguayo, Zelmar Michelini.

Hoy, un cuarto de siglo después, la lucha del movimiento de derechos humanos y de la izquierda empieza a hacer realidad las palabras con que Orlando Letelier respondió a Pinochet tras privarle éste de su nacionalidad chilena: “Cuando sea restablecida la democracia, junto a los derechos del hombre que han sido usurpados por los dictadores, éstos deberán responder ante los tribunales de los delitos cometidos contra su país”.

Apoyo 1: La DINA, instrumento de la represión

Hasta su sustitución en agosto de 1977 por la Central Nacional de Informaciones, la Dirección de Inteligencia Nacional fue el principal instrumento de la represión. El 12 de noviembre de 1973 el teniente coronel Manuel Contreras fue nombrado responsable de la Comisión DINA por la junta y meses después se convirtió en su director por una orden verbal de Pinochet. El 18 de junio de 1974 el decreto ley número 521 anunció la creación oficial de este cuerpo represivo disfrazado de organismo de “inteligencia”.

“La DINA se erigió enseguida en un grupo de élite de violencia selectiva, de actuación clandestina y armada, y destinada a la persecución y eliminación física de los más destacados representantes del régimen político depuesto. Por su actuación puede ser calificada como un grupo terrorista”, sostiene CODEPU [17]. Durante el juicio en Chile por el asesinato de Letelier y Moffit Contreras admitió que dirigió la DINA y que ésta contaba con dos mil agentes y unos cincuenta mil confidentes.

Este cuerpo represivo es el responsable del asesinato de cuatro de los seis ciudadanos españoles víctimas de la dictadura chilena. Así, el sacerdote valenciano Antonio Llidó, militante del MIR, fue secuestrado por la DINA a finales de septiembre de 1974 y, tras ser torturado en las cárceles clandestinas de José Domingo Cañas y Cuatro Alamos, desapareció el 25 de octubre. Por su parte, Michelle Peña, estudiante de ingeniería y dirigente de las Juventudes Socialistas, fue detenida por la DINA el 24 de junio de 1975 cuando estaba embarazada de ocho meses. Según testimonios recogidos por la Vicaría de la Solidaridad, Peña dio a luz durante su cautiverio, pero se desconoce el paradero de su descendiente. Tras estar recluida en Villa Grimaldi desapareció.

También Antonio Elizondo, natural de Logroño y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria, fue arrestado por un comando de la DINA el 26 de mayo de 1976 y encerrado en este siniestro campo de concentración junto a su esposa, Elizabeth Rekas, quien estaba encinta. Sus cuerpos tampoco han aparecido. Por último, Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA, quienes le condujeron al domicilio de Michael Townley, donde fue torturado con brutalidad y asesinado. Después sus verdugos le arrojaron dentro de su vehículo por el canal El Carmen de Santiago de Chile.

Apoyo 2: Villa Grimaldi

Villa Grimaldi fue el centro de detención más siniestro de la DINA. Allí estuvieron encerrados unos cinco mil presos políticos que fueron torturados con extrema crueldad; de ellos 142 están desaparecidos. Conocido como Cuartel Terranova por

los represores, Villa Grimaldi empezó a recibir detenidos de manera regular desde fines de 1974. Según relata el Informe Rettig, en aquel recinto había “un ambiente de degradación generalizada. Además de las torturas durante los interrogatorios, tanto los oficiales como los demás agentes operativos y algunos guardias permanentemente golpeaban y vejaban a los detenidos”. [18]

La periodista Gladys Díaz evoca así su martirio durante tres meses, “día y noche”, en el Cuartel Terranova de la DINA: “Me aplican corrientes eléctricas mientras me tienen desnuda en un camastro metálico. Sufro dos paros respiratorios. En todas las sesiones de tortura está presente un médico. Mis ojos están vendados. Alguna vez me quitan la venda y puedo ver a los oficiales de más alta graduación”.

No obstante, el peor recuerdo de su estancia en Villa Grimaldi es el haber sido obligada a presenciar los asesinatos de dos detenidos. En uno de ellos “me sacaron de la celda con otra persona que está desaparecida y nos condujeron a una dependencia. Un joven de 21 años, corpulento, estaba amarrado a una columna. Se llamaba Sedomil Lausic. Empezaron a golpearle con una cadena. Dijeron que había intentado fugarse. Era fuerte. Costó mucho que muriera. Perdí la noción del tiempo, pero al menos estuve allí dos horas. Sólo deseaba que muriera pronto. Al principio gritaba. Después sólo emitía un ronquido. Al final, un mero estertor. Pasé meses en los que no podía quitarme de la cabeza el ruido de una cadena cuando golpea un cuerpo humano”. [19]

Junto con Villa Grimaldi, otras cárceles clandestinas o campos de concentración, como Cuatro Alamos, José Domingo Cañas, Isla Dawson, Tejas Verdes, Pisagua, Londres 38, Ritoque, Tres Alamos, el Estadio Chile, Chacabuco o el Estadio Nacional forman parte de la geografía del horror pinochetista.



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: <http://www.archivochile.com> (Además: <http://www.archivochile.cl> y <http://www.archivochile.org>). Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com y ceme@archivochile.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quienes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu [sugerencia / errata](#).